

4075-D-03

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 27, inciso c), capítulo VII, de la ley 24.193, que quedará redactado de la siguiente manera:

Capítulo VII

De las prohibiciones

Artículo 27: Queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse:

- a) Sin que se haya dado cumplimiento a los requisitos y previsiones de la presente ley;
- b) Sobre el cadáver de quien no hubiera otorgado la autorización prevista en el artículo 19 y no existieran las establecidas en los artículos 21 y 22;
- c) Sobre cadáveres de pacientes que hubieren sido declarados insanos o dementes por juez competente como prescribe el artículo 140 del Código Civil.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Marta L. Osorio.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La intención de este proyecto es darle un marco limitativo a la prohibición prescrita por el artículo 27, inciso c), de la ley 24.193. Según prescribe la ley citada en el inciso c) del artículo 27, queda prohibida la realización de todo tipo de ablación cuando la misma pretenda practicarse sobre cadáveres de pacientes que hubieren estado internados en institutos neuropsiquiátricos. Si bien la intención de este inciso era brindar seguridad a los donantes, esa seguridad pretendida se ha constituido hoy en un obstáculo innecesario para la donación.

Como todos sabemos, muchas personas suelen someterse a tratamientos psiquiátricos y hasta a internaciones en neuropsiquiátricos aunque su capacidad de discernir no esté afectada, así es el caso, por ejemplo, de personas con profundas depresiones o leves trastornos mentales.

La redacción original del artículo 27, inciso c), de la ley 24.193 crea una prohibición tan extensa que prohíbe que personas, que por cuestiones diversas han estado internadas en neuropsiquiátricos, donen órganos. En la ciudad de General Pico se dieron varios casos como los descritos; por ejemplo, en un paciente comatoso por paro cardiorrespiratorio resucitado, al que se le realizó una tomografía computada de cerebro, se objetivizó una gran hemorragia que producía presión y daño de masa encefálica inoperable; el paciente entró rápidamente en coma grado 4 muerte encefálica. Desde el respectivo nosocomio se aborda a la familia para su donación, la cual accedió a dicho pedido luego de su meditación. El fallecido era un hombre de unos 55 años con muy buen estado general con viabilidad aceptable multiorgánica. Pero tenía un gran inconveniente desde el punto de vista legal: dos años atrás había tenido una hemorragia digestiva por una úlcera gástrica asociada a un cuadro depresivo por el cual fue abordado por el servicio de salud mental. Esta intervención del área de psiquiatría del respectivo hospital fue óbice suficiente para que la Justicia no autorizara la donación, condenando así a otro ser humano a la muerte por un obstáculo infundado y cercenando la última voluntad del fallecido y sus familiares.

Obstáculos como los que prevé el artículo 27, inciso c), de la ley en cuestión atentan contra la voluntad de las personas, obligando a éstas a “no hacer” sin motivo alguno.

Según prescribe nuestro Código Civil en el artículo 140: “Ninguna persona será habida por demente, para los efectos que en este código se determinan, sin que la demencia sea previamente verificada y declarada por juez competente”. Además, agrega en el artículo 141: “Se declaran incapaces por demencia las personas que por causa de enfermedades mentales no

tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes”.

La exigencia de los artículos mencionados se fundamenta en la necesidad de proteger a las personas incapaces y evitando cercenar su libertad de acción y decisión. Es por eso que insistimos en que lo dispuesto por el artículo 27, inciso c), de la ley 24.193 avasalla sin fundamento alguno las libertades.

Es por todo lo hasta aquí expuesto, que solicito a los miembros de esta Honorable Cámara acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.

Marta L. Osorio.

—A las comisiones de Legislación General y de Acción Social y Salud Pública.